

El perfil económico de Iberoamérica (*La rectificación de un camino equivocado*)

Juan VELARDE FUERTES

Por muchos motivos interesa a los españoles la suerte económica de Iberoamérica. En primer término, por pura fraternidad. El viejo tronco común, se escindió definitivamente a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, entre sus diversos nuevos retoños existe tal afinidad, que les apetece tener las ramas entrelazadas, sabiendo muy a fondo los unos de los otros. En segundo lugar, porque el mundo de los negocios de España tiene un campo casi natural de expansión en toda la región iberoamericana. Son tan patentes ciertas economías externas, que van incluso tan más allá del idioma en relación con estos países, que sería estúpido no aprovecharlas a fondo. Claro es que el beneficio puede ser alto si las cosas van bien en lo económico en el mundo hispano, y reducirse muchísimo, o incluso anularse, si la crisis galopa en estos países. Finalmente, el tercer motivo es pedagógico. Más de una vez, a lo largo de la Edad Contemporánea, España se ha encontrado en situaciones parecidas a las de estos pueblos. Hemos recibido los hispanos los mismos cantos de sirena, capaces de hacer estrellarse a cualquier economía y, cuando hemos reaccionado con sagacidad desoyéndolos, el hacerlo ha rendido buenos y muy parecidos frutos a un lado y otro del Atlántico.

Por este triple motivo éste pasa a ser el momento de la observación de la economía iberoamericana.

Los tiempos parecen los adecuados. En 1991 comenzó a disiparse la tremenda crisis económica iberoamericana, que había estallado en el verano de 1982 y que en la historia económica recibirá el nombre de **crisis de la deuda externa** porque se manifestó alrededor de un colosal endeudamiento de Iberoamérica en los países más ricos. Recientemente, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique V. Iglesias (1992), indicaba por qué daba la impresión Iberoamérica, de haber doblado el cabo de las Tormentas. En primer lugar, por el restablecimiento general de las instituciones democráticas. Como señala Iglesias, "ese renacer democrático trajo consigo, a la vez, la necesidad de actuar pronto y simultáneamente en varios frentes relacionados: la recuperación económica y el desarrollo sustentable a largo plazo; la solución de la deuda social y el establecimiento de condiciones permanentes de

equidad distributiva, y la inserción de estas economías en el marco económico internacional".

Todo esto pudo haber fracasado si, como completa Enrique V. Iglesias, no hubiese surgido en muchos países "una nueva generación de líderes políticos, con ideas frescas, que pusieron en marcha uno de los procesos de cambio más profundos que ha tenido la región en lo que ha transcurrido de este siglo, guardando ciertas simetrías con aquellos cambios que han venido ocurriendo en el escenario económico mundial. Esos cambios se han proyectado, asimismo, hacia los empresarios privados, a la burocracia pública y, en general, a todos los sectores de la trama de las sociedades de nuestros países. La actitud generalizada en este proceso de renovación se caracterizó por el predominio del pragmatismo sobre las ideologías, resultante de una profunda reflexión crítica sobre el pasado. Ese análisis crítico identificó como elemento central la excesiva tolerancia de los países con: a) la inestabilidad, tanto económica como política; b) la inflación y los déficit fiscales; c) la ineficiencia asociada a las políticas proteccionistas y d) la desigualdad económica externa", lo que, a su vez exige "el ataque frontal a los déficit fiscales; la promoción de la eficiencia en las esferas de actividad privada pública, y la búsqueda de soluciones de emergencia y estructurales a los problemas sociales".

Naturalmente que esto supuso abandonar en el baúl de los recuerdos –habría que decir, de los malos recuerdos– todo un haz de políticas económicas simultáneamente nacionalistas y populistas, que iniciaron su andadura hacia 1930 y que culminaron en las tesis del denominado estructuralismo económico latinoamericano. Casi podríamos decir que su crepúsculo matutino se halla en los populismos mexicanos que con Madero, derribaron a Porfirio Díaz; su orto se encuentra en los manifiestos, llenos de orgulloso nacionalismo económico, de los grupos políticos y de los oficiales jóvenes –dentro de un fenómeno típico de "jóvenes turcos"– que apoyaron en Argentina el triunfo del general Perón; su ocaso, se encuentra en el fracaso estrepitoso en Perú del intento de Alan García de reconstruir su economía de acuerdo con el modelo estructuralista económico latinoamericano interpretado por Carbonetto.

Durante más de sesenta años, una y otra vez, se ensayaron, desde el río Bravo al Cabo de Hornos, mil variantes políticas y económicas heterodoxas que concluyeron por cristalizar en el crisol de la CEPAL. Es esta una cuestión importante.

Bajo el impulso de Raul Prebisch, esta singular institución pasó a ser amalgama de una Comisión de las Naciones Unidas, con mucho más. Era, por un lado un centro de investigación y análisis económico. Incluso tenía mucho de entidad docente, tanto directamente en sus propios locales de Santiago de Chile, en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social para América Latina (ILPES), que dirigió

el propio Prebisch, como en proyecciones muy importantes. Pensemos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

El **estructuralismo económico latinoamericano** se gestó en esos complejos despachos de CEPAL, de tal manera que esta ideología —el último de los retoños nacidos del ya añoso árbol del historicismo económico— orientó de forma progresiva la política económica de las naciones iberoamericanas. En los centros académicos del continente y en sus institutos de investigación, la difusión de tesis como las de la **teoría de la dependencia** fue extraordinaria. Como un reguero de pólvora crecía en todas partes el convencimiento de que existían diferencias radicales entre las estructuras económicas de los países del centro y de la periferia. Con ello se había atacado con proyectiles dirigidos a la santabárbara, todo el montaje teórico de la teoría del comercio internacional de origen en Ricardo, que había alcanzado finuras extraordinarias con los trabajos de los Taussig, los Haberler, los Viner, los Machlup o los Leontief y, en especial, con los teoremas Heckscher-Ohlin-Samuelson que enlazaban con el resto del análisis neoclásico. Fue esencial para justificar tal ataque la famosa hipótesis Singer-Prebisch, del deterioro de la relación real de intercambio de la periferia. Desde ahí se había desprendido toda una importante formulación para orientar el progreso económico de los países en vías de desarrollo hacia una industrialización, que pretendía en primer lugar, poner remedio a un punto clave de la explicación de Prebisch: la elasticidad renta de las importaciones industriales de la periferia es superior a 1 y es mucho mayor que la del centro, mientras que la elasticidad precio para las materias primas y alimentos que suelen exportar los países del Tercer Mundo, es más baja que la de los productos industriales. Pero, en segundo término, con la industrialización se pretendían también aprovechar para el desarrollo las **economías externas** que se generan con un proceso de este tipo. Como éste no se pone en marcha de modo espontáneo es preciso que lo impulse una amalgama de actividades estatificadoras y de reservas del mercado nacional unidas a procesos de sustitución de importaciones. No existen, pues, diferencias demasiado profundas con las recomendaciones de tipo populista-autoritario y populista-marxista que habían germinado en toda Iberoamérica.

Todo esto provocó una controversia muy amplia en toda la región iberoamericana. El papel histórico de Enrique V. Iglesias fue, como Secretario Ejecutivo de CEPAL, conducir a esta institución a través del largo período de su mandato, que duró de 1972 a 1985, de unas aguas en exceso tempestuosas —pues habían causado las políticas estructuralistas, en buena medida, la crisis de la deuda externa de 1982— a otras más tranquilas, de progresiva aceptación de los modelos de desarrollo de raíz neoclásica que comenzaron planteándose por algunas formaciones políticas de la derecha iberoamericana y que, posteriormente, acabaron siendo asumidas, no ya por partidos de centro, como puede ser la Democracia Cristiana chilena, sino por partidos populistas como el Justicialismo o el PRI mexicano.

De ahí que interese escudriñar más a fondo cómo, en tres países fundamentales —Chile, Argentina y México— se produjo la rectificación de una política económica que en los tres parecía bien asentada en torno al citado **estructuralismo económico latinoamericano**. Desde estas tres naciones es desde donde, como una mancha de aceite, el cambio de política económica se ha extendido por toda la región.

El motivo básico se encuentra en que tres presidentes, Menem en Argentina, Aylwin en Chile y Salinas de Gortari en México, decidieron poner coto a la crisis de la deuda externa que zarandeaba a los tres países, con caídas en el PIB, agobios de las balanzas externas, inflaciones fortísimas y paros acusados. Sus correspondientes tres ministros, los notables economistas Cavallo, Foxley y Aspe, buscarán precisamente en la ciencia económica más rigurosamente acedémica, la inspiración para su actuación política. Los tres presidentes pasaron a contemplar, con gozo evidente, que al seguir los consejos de los técnicos, sus países renacían a la esperanza.

Tan importante es esto que bien merece la pena observarlo más de cerca. Comencemos por Chile.

En el conjunto de la economía iberoamericana, Chile destaca, según una reciente estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) por varios motivos. En primer lugar porque ocupa el primer puesto de toda Iberoamérica en la tasa de desarrollo medio por el Producto Interior Bruto (PIB) real por habitante para el período que va de 1981 a 1993.

Se sitúa así, con unos 3.000 dólares de renta por habitante, en el cuarto puesto del área iberoamericana. Por supuesto que, comentando estas comparaciones, Rodrigo Fuentes, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, puso en guardia sobre deducciones apresuradas, a causa, sobre todo a corto plazo, de movimientos en el tipo de cambio del dólar con las respectivas monedas del área. Pero, de todos modos, una reciente estimación del Banco Central de Chile, le situó en ingresos por habitante en el tercer lugar, y no en el cuarto, al haberse sobrepasado a Uruguay. No nos entretengamos más en problemas de tan poca monta como es este tercer o cuarto puesto. Agreguemos, en cambio la caída en el desempleo, y que la economía chilena quedó libre de riesgo en los mercados financieros internacionales, con lo que es la única de Iberoamérica que ha merecido ese galardón.

Esta situación satisfactoria, no sólo en la marcha del PIB, sino en la del IPC, en cifras de ocupación y paro, en salarios, en las cuentas del Sector Público, en los balances exteriores, en el mercado de capitales, en la liquidación del lastre de la deuda externa, no se ha creado por casualidad. Es el resultado de un trabajo muy serio de rectificación de errores. El último de estos últimos fue el del Gobierno Allende de Unidad Popular, elegido en 1970. Como señala Patricio Meller (1990): "la Unidad Popular estimaba que el patrón de desarrollo económico anterior era demasiado lento.

Este crecimiento relativamente lento estaba asociado con el control de la economía, y específicamente, de la industria manufacturera, por monopolistas extranjeros y nacionales. Para acelerar el crecimiento se requerían profundos cambios estructurales, lo que significaba que el Estado debía tener un mayor control de la economía y transformarse en el Estado-planificador central. Pensaba también que ésta era una condición necesaria para la construcción de una nueva sociedad socialista". Un trabajo de D. Hachette y R. Lüders (1987), nos muestra cómo las empresas estatales, que participaban en 1965 en la generación del 14,2% del PIB chileno, saltaron al 39,0% en 1973.

Era el final de un proceso que había acertado a prever un célebre político español, Francisco Cambó, desde su observatorio argentino de Mon Repos. Escribió Cambó (1982) el 22 de marzo de 1944 esta declaración que tenía mucho de profecía escalofriante: "Ahora en Chile, ante la situación terrible provocada por el *match* infernal de la puja constante entre los salarios y el incremento constante del coste de la vida, se les ha ocurrido a la agrupación de las izquierdas el siguiente programa: "Defensa del régimen democrático; adhesión del gobierno chileno a la Carta del Atlántico; establecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas con la URSS; creación del Banco del Estado y del Consejo de Economía; defensa de las leyes sociales protectoras de empleados y obreros; medidas enérgicas contra el constante aumento del coste de vida; plan agropecuario con intervención del Estado; subsidio familiar para los obreros, e indemnización a los obreros por años de servicio". Y esto lo han votado seriamente unos señores que gobiernan... y que pretenden seguir gobernando un país que, cuando no hacía demagogia, figuraba entre los primeros de América. No es posible que quienes han votado el programa no supiesen que sus conclusiones, unas son totalmente inocuas; otras significan el agravamiento de las causas que han provocado la crisis actual... y otras serán, en caso de aplicarse, otro factor de miseria. No, no han votado por convicción sino por cobardía. Y el régimen democrático chileno caerá por esta cobardía de los que se proclaman sus defensores".

A partir del final de la II Guerra Mundial, el proceso de desorden económico chileno se aceleró como consecuencia de la difusión de las doctrinas corrientes en la CEPAL.

En el caso de Chile se creyó, como indica Carlos F. Cáceres (1992), que "el desarrollo se alcanzaría a través de un proceso de industrialización hacia adentro. Se protegió a la industria nacional (cada vez más ineficiente) con aranceles y todo tipo de barreras para-arancelarias y a los cultivos agrícolas tradicionales (trigo, arroz, remolacha, etc.) independientemente de si eran o no los procesos agrícolas más rentables. Para evitar las restantes alzas de precios de los bienes comestibles básicos se comenzaron a aplicar fijaciones generalizadas de precios, y el Gobierno actuó como proveedor del exceso de demanda de estos bienes a través de importaciones". A partir

de ahí todo se hizo trizas. El sistema tributario procuraba allegar recursos para esta situación, a través de un conjunto impositivo "desordenado y opresivo". Cada vez más habitualmente, estos recursos se conseguían sencillamente a través de la inflación. El cambio entró en crisis y todo empujaba hacia arriba a los tipos de interés, a lo que respondía la autoridad económica otorgando créditos selectivos directamente, ya a través del Banco Central, ya gracias a CORFO (Corporación de Fomento de la Producción, que juega un papel semejante a nuestro INI), o ya mediante otras instituciones bancarias públicas.

La Administración Pinochet había defendido como modelo económico la concepción de un énfasis esencial al sector privado, al liberar el mercado, al liberalizar asimismo al sector externo y al desregular, en todos los sentidos, la economía. Añadamos la Reforma Previsional, realizada en Chile en 1980, que creó para los regímenes de pensiones por vejez, invalidez, viudedad y orfandad, un sistema de capitalización individual de administración privada, a través de las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que sustituyó a grandísima parte del sistema de reparto que imperaba en el sistema de pensiones de la Seguridad Social chilena. Como señala Luis Larraín A. (1991), a causa de la necesidad de invertir que experimentan estos fondos de pensiones, las AFP "se convirtieron en las mayores inversionistas institucionales del mercado". Por supuesto que ahí se encuentra, también, uno de los puntos más delicados del nuevo sistema. Aún con el pesado choque que el modelo experimentó como consecuencia de la **crisis de la deuda externa** —el PIB cayó un 16% durante el período 1982-1983, el paro creció hasta situarse por encima del 30% en 1983 y por encima del 20% hasta 1986; los salarios reales se redujeron casi un 20% y, durante cinco años subieron muy poco—, el modelo se mantuvo y cuando Aylwin recibe los poderes en 1990, como señala Patricio Meller, respecto al resto del área iberoamericana, "Chile tiene una situación macroeconómicamente relativamente mucho mejor y ha alcanzado una base estructural más sólida para las perspectivas de crecimiento y desarrollo en la década de 1990".

La Administración Aylwin había considerado que la **economía social de mercado** era la "opción que garantizaba mejores oportunidades para un desarrollo sostenido". Pero éste debía concretarse, tras la positiva experiencia económica anterior y el caos al que había conducido a Chile al Gobierno de Unidad Popular, en "un crecimiento estable, basado en la inversión y en las exportaciones, en lugar de bonanzas artificiales de corto plazo". Para eso fue preciso, primero, combatir el excesivo crecimiento —casi un 10%— de 1989, que da la impresión que pudo deberse a exigencias electoralistas de Büchi-Pinochet; en segundo lugar, en 1990, resultó obligado el trasladar al mercado las alzas en el precio del petróleo y no acudir a subsidios del sector público para evitar momentáneos impactos inflacionistas.

Se unió todo esto, que en el fondo podía estar en el programa opositor de la derecha (UDI-RN), con un planteamiento social original que constituyó el que podría

denominar **sello de Foxley**: una reforma tributaria que, por supuesto, no alteró en lo esencial la línea fiscal aprobada en 1984, heredera, a su vez, de la de 1974, capaz de financiar un mayor gasto social en áreas tales como la salud, la educación y la vivienda y, al mismo tiempo, para que este programa reformista no originase ninguna perturbación, que fuese suficiente para provocar un superávit fiscal. Durante los años de mandato de Foxley efectivamente se generó "un superávit fiscal equivalente a un 2% del PIB en promedio, llegando a un 3% del PIB en 1992".

El impulso a la economía chilena procede, sobre todo, del sector exterior. A pesar de la coyuntura depresiva, las ventas al exterior se incrementaron, en 1992, a una tasa real del 12%. Con legítimo orgullo pudo señalar Foxley "que la economía chilena compite hoy fuertemente con los más eficientes productores mundiales en una amplia variedad de rubros. Chile exporta hoy más de un tercio de su producción y un 70% de ella está constituida por bienes transables internacionalmente". Japón es su primer socio comercial. "Aproximadamente", dijo Foxley, "Chile distribuye sus exportaciones en proporción de... un tercio para cada uno, en los mercados de Asia, la CEE y América".

Finalmente, el modelo supone la existencia de un alto grado de concierto —"una especie de obsesión nacional", subrayó Foxley— entre el sector público y el privado; entre Gobierno y oposición; entre Ejecutivo y Congreso, y entre empresarios y sindicatos, lo que origina que "el número de días de huelga por trabajador y por año haya sido de los más bajos del mundo".

Todo el modelo económico chileno descansa en un complicado entramado que requiere una democracia ejemplar. Como señala Foxley, al no haber resuelto adecuadamente la democracia chilena el problema de la financiación de los partidos políticos y de las elecciones, ¿cómo hacer para que el sistema — y es evidente que cuando hablaba de esto tenía que pensar, a la fuerza, en Italia y España— se convierta en invulnerable "a las irregularidades financieras y la corrupción que ha irrumpido como una epidemia en las democracias más avanzadas"?

Veamos ahora lo que sucede a la economía argentina. A partir de un famoso estudio de Díaz Alejandro quedó muy claro que ésta había atinado a insertarse del modo más adecuado en la economía mundial en el siglo XIX. A su compás tuvo altísimas tasas de desarrollo y comenzó a comportarse como la de otros cuatro países que se han convertido en opulentos miembros de la OCDE: Estados Unidos y Canadá en América, y Australia y Nueva Zelanda en el Pacífico. Para siempre quedará en los argentinos el agradecimiento hacia Colin Clark porque en 1942, cuando redacta el librito **La economía de 1960**, aún apuesta a fondo por el futuro de su economía. Hoy, con unos 3.000 dólares de renta, si se apresta a participar en la dura carrera del desarrollo, debe volver la vista atrás para analizar por qué corrió desembarazadamente

en ella de 1880 a 1930 y por qué, a partir de esta fecha y hasta ahora mismo, más que carrera, lo que se observa en el caso de Argentina es un continuo conjunto de caídas espectaculares y de cansinos progresos.

En lo político, en 1880, con el presidente Julio Argentino Roca al frente del Partido Autonomista Nacional, se inaugura una nueva administración y, con ella, una etapa nueva en el país. Esto significaba la paz y la solución de una larga guerra civil que enfrentaba diversas concepciones del país. Eduardo Wilde sostenía, al contemplar esas conmociones: "No hay tal nación argentina ni la ha habido nunca; lo que ha habido es una ficción en la que las dos partes, Buenos Aires y las provincias, se creían explotadas". Roca fue capaz de resolver esta situación. Buenos Aires, como indicó José Arce, dejó de ser de hecho, "la nación, porque las provincias del interior han reclamado la voz que les corresponde en el cónclave, y se convierte de derecho en la Capital de la Nación, lo que no es lo mismo".

Ha aparecido, pues, en 1880, la Nación argentina en su total integridad, y con ella el mensaje presidencial de Roca se pone en marcha con el lema, que casi parece de nuestros regeneracionistas, de Paz y Administración. Eso supuso, en el terreno económico, en primer lugar, la liquidación de una situación caótica monetaria. La ley 1130 de 5 de noviembre de 1881, adhiere el peso al patrón oro. Por supuesto que acontecimientos económicos como los de 1884, supusieron cortes en la libre convertibilidad de los billetes. La energía de Carlos Pellegrini logró, en 1890 y 1891, que retornase, tras una dura estabilización, el patrón oro.

La segunda acción de Roca se dirigió a la creación de una infraestructura capaz de soportar un fuerte desarrollo económico. En 1885, en el Congreso, exponía así la base más importante de su política: "Si se ha gastado mucho, ahí está como capital activo de la Nación. Los ferrocarriles concluidos o a concluirse, los telégrafos, puertos y puentes..., los edificios y obras exigidas por la evolución".

El tercer punto de apoyo fue la aceptación del librecambismo. La presidencia de Mitre (1862-1868) había hecho suyas las doctrinas del libre comercio que tanto había jugado —recordemos a Manuel Belgrano— en el alzamiento independentista de 1810. El librecambismo no se puso en marcha sin polémicas. Recuérdese el debate de la Ley de Aduanas de 1876 y, en particular, la intervención en la Cámara de los Diputados de Vicente F. López, francamente vinculada a la tesis entonces tan corriente del "fomento del trabajo nacional". Roca supo superar esas tentaciones y Argentina se incorporó al tráfico internacional especializándose en aquello en que tenía una mayor ventaja comparativa, la producción agropecuaria.

El cuarto aspecto fue, de modo semejante a como sucedía entonces en los Estados Unidos, expulsar a la población india de las praderas. En los postreros años del último

Virrey, Hidalgo de Cisneros, éstos aún acampaban en las proximidades de Buenos Aires. Fue decisiva en ese sentido la llamada "Campana del desierto" llevada a cabo por Roca, quien hablaría con orgullo de "los millares de leguas conquistadas al salvaje".

Así es como se crearon las condiciones para recibir una fuerte importación de capitales, de empresarios y de mano de obra. Como se señala por Hebe Noemí Campanella (1983), "el desarrollo económico –aprovechamiento intensivo de las vastas praderas, trazado de nuevas líneas férreas para favorecer la expansión del comercio, mejoramiento del ganado y de los servicios públicos– exigía no sólo poblar la nación, sino también movilizar capitales, y si lo primero se logró con el aporte del sur de Europa, lo segundo se obtuvo fundamentalmente del norte, en especial de Gran Bretaña".

Se rompió así la inercia latifundista que parecían imponer, a mediados del siglo XIX, los dueños de enormes extensiones de tierra, que respondían a unos pocos apellidos legendarios: los Anchorena, los Unzué, los Alzaga, los Lastra, los Corcuera. La ganadería nueva se articula desde 1885, en torno a la famosa Sociedad Rural. La actividad generada por las exportaciones de carne, cueros, lana y granos pasó a ser vertiginosa. Asombrado, John H. Williams escribiría: "No es mucho decir que en esos diez años (1880-1890) la Argentina tuvo un desarrollo mayor que en todas las décadas que le precedieron en ese siglo". Hasta 1930, como ha probado el doctor Cavallo (1984), su ritmo de desarrollo se sitúa entre los más altos del mundo occidental. La tasa media anual de crecimiento real del PIB argentino a lo largo de los setenta años que van de 1860 a 1930, es la colosal del 5%. Cifra tan alta no la alcanza en ese período ninguna otra nación.

Todo se altera precisamente a partir de 1930. El golpe del general Uriburu en septiembre de 1930 tuvo mucha importancia. Interrumpió una situación democrática que era bastante normal desde 1880. En 1930, el Ejército, que había sostenido, parecía que sin fisuras, al presidente Hipólito Yrigoyen, contempla en silencio cómo éste es depuesto por una oficialidad joven que intenta emular otros modelos extranjeros: los jóvenes turcos; la Dictadura de Primo de Rivera; el nacionalismo francés; el fascismo italiano; los complicadísimos nacionalismos germanos con sus organizaciones paramilitares, como los Cascos de Acero y las SA. Todo esto deja una huella muy honda en la oficialidad que sigue a Uriburu. Mientras el Ejército se depura de los militares y rigoyenistas, se nutre ideológicamente de literatura nacionalista, entre la que destacan las publicaciones del grupo FORJA. La oficialidad joven que participó en 1930, crea el núcleo de un auténtico tercer partido, al que debería llamarse **partido militar**, que, desde entonces, entra en la alternativa del poder; primero, con conservadores y radicales; después con radicales y peronistas. Desde la constitución del GOU –o Grupo de Oficiales Unidos–, en el que es fuerte la influencia del coronel Perón, es

evidente que este partido existe. Cuando Perón entra en el juego bipartidista, el Ejército lo rompe, al pasar a actuar contra Perón, como sucede con el levantamiento de Lonardi que derriba al justicialismo en 1955.

Estos acontecimientos iniciados en 1930, causaron, en relación con la situación económica, una serie de consecuencias perturbadoras. Cavallo mencionó, como más importantes, la pérdida de la estabilidad política; la separación del sistema económico mundial, facilitado porque la Gran Depresión acentúa la ruptura del comercio internacional; el que se azuce en todas partes, incluida la Argentina, a las posturas autarquizantes; el crecimiento a partir del mercado interior, que llevará a un creciente aislamiento político, incluso exhibido como una bandera, como sucedió con la famosa Tercera Posición peronista, que facilita, a su vez el encapsulamiento económico; finalmente, la ampliación del tamaño del Estado, que incluso le va a conducir a adueñarse de empresas hasta los límites pintorescos de la relación que Sorrouille publicó en la revista **Desarrollo Económico**, lo que a su vez explica que el Estado comience a tener crecientes déficit fiscales. La consecuencia de esto es grave. Al perder el crédito el sector público ha de recurrir, una y otra vez, a la inflación, hasta llegar al paroxismo de 1989.

Para Cavallo el cambio se inició en 1983, al reinstaurarse la democracia, tras el descalabro experimentado por el Proceso, o partido militar, en el conflicto de Malvinas. Este es el papel histórico del presidente Alfonsín. El país comienza a normalizarse en lo político, gracias a la puesta en marcha, de nuevo, de la Constitución de 1853. El cambio político no afecta sólo al interior, sino al exterior. En 1984 se acepta, en virtud del **Lauda papal**, la paz con Chile; en 1985 se inician buenas relaciones con Brasil, eliminando la costosa carrera nuclear entre las dos potencias, mientras comienza Mercosur a dar los primeros pasos. Menem acentuará la apertura; restablece las relaciones con el Reino Unido; firma el Tratado de Asunción, por el que Mercosur abarcará Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; ratifica el Tratado de Tlatelolco, de no proliferación de armas nucleares; participa en el conflicto de Irak, como un aliado más de Norteamérica.

Con el flanqueo de esta apertura al exterior se inicia el segundo cambio, el de la reorganización del Estado, para achicar sus competencias. En este sentido desempeñó un papel fundamental un importante administrativista y veterano justicialista, José Roberto Dromi. Sin consultar su obra **Reforma del Estado y privatización. Introducción, notas y texto ordenado**, es imposible comprender lo sucedido. Previamente había expuesto un adelanto de estas ideas en un libro que firmó juntamente con Carlos Menem, publicado antes de alcanzar éste la presidencia, y titulado **Reforma del Estado y Transformación Nacional**. La privatización de las empresas públicas tuvo una doble consecuencia: alivios presupuestarios por una parte y, en tanto en cuanto parte de estos activos pasan al extranjero, robustecimiento de la balanza de

pagos y sostenimiento de la cotización de la moneda nacional. Ese achicamiento del Estado permitió reducir el gasto público en un 10%.

La tercera pieza fue la liberalización del mercado, tanto respecto al exterior —disminuyen los aranceles y se eliminan controles de precios y de cambios, al aceptarse para el peso un patrón dólar, con convertibilidad plena—, como en el interior.

Facilitan esta situación las privatizaciones de las empresas estatales de todo tipo, incluidas las de electricidad, puertos, gas y su distribución y transportes ferroviarios. Estas tendrán que competir, en régimen de libertad de tarifas, con la carretera. Se piensa privatizar las centrales nucleares y los aeropuertos. Al final quedarán en manos del Estado, del sector empresarial público, únicamente el Banco de la Nación Argentina y el Banco Hipotecario.

Todo se vendría abajo si el peso no fuese una moneda estable. Pasa a ser clave, por eso, el funcionamiento de una Caja de Conversión en el Banco Central para mantener perfectamente convertibles en dólares los pesos, que de esta manera pueden transformarse en una moneda aceptada con normalidad.

También se había decidido alterar la estructura de la Seguridad Social con la nueva ley de subsidios y pensiones, que va a conducir a un sistema de capitalización que, de algún modo, se va a parecer al modelo chileno. Finalmente, Menem, gracias al conocimiento de las estructuras sindicales y al apoyo del aparato peronista —o, por mejor decir, neoperonista—, se atreve a plantear la necesidad de flexibilizar el mercado del trabajo.

Las consecuencias no pueden ser mejores. Se recupera la inversión, que se incrementa en un 30% anual, aunque hay que admitir que se partía de niveles muy bajos. Mejora la productividad en el seno de las empresas. Vuelven los capitales argentinos huidos al exterior. El aumento del ahorro interno permite prescindir del externo, con alivio para la situación de la deuda externa. Caen los índices de pobreza, y si crece el paro, al mismo tiempo que lo hace el empleo, al incremento del índice de actividad se debe. Como colofón, Argentina, que tuvo un muy buen sistema educativo en el pasado, se dispone a recuperarlo, con crecientes niveles de exigencia y de calidad. Sencillamente, para que toda esta honda transformación no sea flor de un día.

Y ahora, México. Jesús Silva-Herzog, un notable economista mexicano que ha sido hasta fecha bastante reciente embajador de México en España, prácticamente casi iniciaba su conferencia **México hoy, en el nuevo entorno internacional**, de clausura del programa **México hoy**, de la Tribuna Americana en la Casa de América con estas palabras: "Hace diez años éramos un país en crisis. Nos tocó el difícil papel de hacer estallar la crisis de la deuda externa. La inflación amenazaba con caer en

cauces hiperinflacionarios, el desequilibrio fiscal era mayúsculo, las reservas internacionales se habían agotado y, lo más importante, la sociedad había perdido la confianza no sólo en la moneda, sino en las instituciones y en el futuro".

Como contrapunto a todos y cada uno de estos durísimos problemas, nos encontramos, con que la cuenta de capital de México pasó a registrar una considerable afluencia de recursos externos. Esto contribuyó a una clara mejoría en las cotizaciones de los pagarés de la deuda externa en el mercado secundario. La inflación se reduce espectacularmente. Además, como señalaba Silva-Herzog con legítimo orgullo, "el enorme déficit gubernamental de hace diez años (17% del PIB) se ha convertido en un superávit estimado en algo menos del 1% del PIB para 1992. Este hecho nos coloca en la lista de los muy pocos países del mundo que tienen saldos positivos en sus finanzas públicas. Por supuesto que este resultado ha requerido actuar del lado del gasto y del ingreso; en este último campo han tenido lugar enormes avances, sobre todo en los últimos años, en la mayor conciencia fiscal de los contribuyentes".

En el mantenimiento de un nivel saneado de divisas también ha participado el proceso de privatización de las empresas públicas. Su ritmo ha sido tan fuerte en los últimos años que mereció de Silva Herzog el calificativo de "tal vez excesivo". Como subrayó éste, "hemos vendido las aerolíneas, los ingenios azucareros, las empresas siderúrgicas, la compañía de teléfonos, los bancos y seguros, las minas, etc." agregando que, "con toda la justificación económica que se quiera y después de largas décadas de una estrategia contraria, el cambio ha sido radical y, en ocasiones, ha resultado difícil de absorber por parte de la sociedad". Sin embargo, con todas las salvedades que se quieran, gracias a estas ventas, que alcanzan ya una cifra cercana a los 20.000 millones de dólares, se ha podido financiar una reducción de "la deuda pública, interna y externa, de modo considerable".

Pero además, el viejo déficit se debía al que tenía el sector público. Como es natural, esta financiación no dejaba recursos exportables. Hoy, en cambio, el déficit externo se debe a un exceso de inversión privada sobre el ahorro interno, que es muy capaz de generar recursos dentro del marco de la competencia internacional.

Es evidente que una reacción tan fuerte ha tenido que causar costes importantes y, también, ha debido abrir nuevas posibilidades de avance. En el fondo, lo sucedido es tan revolucionario que es preciso preguntarse si responde a algún planteamiento casual aprovechando alguna situación coyuntural, o si pretende alcanzar resultados muy permanentes y, en el fondo, llegar a un nuevo México.

Según Pedro Aspe, tres grandes transformaciones se han procurado para orientar del modo más adecuado posible el "profundo proceso de cambio estructural" emprendido en México. La primera ha sido la reforma macroeconómica que pretendía "abatir la inflación y el sobreendeudamiento, así como...eliminar las distorsiones que inhiben

el crecimiento y, a partir de un nuevo piso económico y de concertación social, estar en condiciones de crear un mejor nivel de vida y mayores oportunidades para los mexicanos".

Inició esta transformación Miguel de la Madrid y se aceleró con Salinas de Gortari. Como dato espectacular de la misma se indica que la inflación en 1993 será cercana al 7%, la más baja de las últimas dos décadas, o lo que es igual, la más reducida que ha conocido "la mitad de los mexicanos, que nacieron precisamente durante esos años". Para lograrla, se pasó de un déficit de alrededor del 17% del PIB en 1982 "a un superávit, por primera vez en cincuenta años, de 0,5% del PIB en 1992", excluyendo para su cálculo los ingresos originados por la privatización de las empresas públicas que, en cambio, de acuerdo con lo ya señalado, han permitido "reducir la deuda pública consolidada total del 62,4% del PIB en 1988 hasta el 24,9% del PIB en 1992".

La liberalización del sistema financiero permitió que las tasas de interés respondiesen "con mayor flexibilidad a los cambios en las condiciones del mercado", al regularse el sistema financiero "con base en criterios de capitalización comparables con los estándares internacionalmente aceptados". Esto, que lisa y llanamente supuso el abandono "de un marco institucional de tasas de interés deprimidas y niveles elevados de encaje legal", significó un apoyo evidente al proceso de desaceleración de la inflación.

A estas políticas restrictivas fiscal y monetaria se unió la liquidación de "un contexto de fuerte indización salarial". Apoyándose, como señaló explícitamente Aspe, en la experiencia española del Pacto de La Moncloa, surgió en 1987 el Pacto de Solidaridad Económica, que se transformó por la Administración Salinas de Gortari en Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, con el que se atajó esta peligrosa situación.

Si es importante esta gran transformación macroeconómica, no lo es menos la transformación microeconómica. Confluye con la macroeconómica, en primer lugar, en la reforma del Estado. Esta, a su vez exigía, para empezar, una modernización del sistema fiscal que "consistió en la drástica reducción de las tasas máximas del impuesto sobre la renta a las personas físicas —del 50% al 35%— y a las empresas —del 42 al 35%—"; en "la ampliación de la base gravable, eliminando privilegios que recibían ciertos sectores en detrimento del resto de la sociedad"; en fin, "en vigilar el estricto cumplimiento de las obligaciones fiscales".

También el proceso de privatización, ampliado con "la participación de la inversión privada en la construcción y operación de obras de infraestructura a través de diversas modalidades de concesión o arrendamiento", al crear "un Gobierno más

sólido y compacto", al mismo tiempo que una economía más competitiva, acelera la modernización del conjunto del sistema económico mexicano.

Con todo ello, la política industrial, que en el pasado "descansaba en subsidios y protección", pasó a apoyarse en un sector privado cada vez más competitivo y en una reducción del papel de las instituciones del sector público a "aquellas áreas en las que el mercado no funciona adecuadamente o donde se requiere una mejor distribución de oportunidades". Lo impulsó el auxilio de la Banca de desarrollo, al sacarla de la ayuda "a grandes empresas ineficientes que en muchos casos eran propiedad del Gobierno", para llevarla a la financiación de "pequeñas empresas privadas, eficientes y flexibles".

Lo completó la creación en 1992, como alternativa al viejo sistema de jubilaciones de la Seguridad Social, del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), "mediante el cual los patronos depositan en las cuentas bancarias individualizadas de más de 10 millones de trabajadores, el 2% de la nómina, a fin de que el ahorro que se acumula en dichas cuentas les permita complementar su pensión".

La liberalización del comercio exterior, en fin, buscó ampliarse con la firma de Tratados de Libre comercio, no sólo con Estados Unidos y Canadá, sino también con Costa Rica, con Chile, y, en el futuro, con nuevas áreas.

Todo acabó teniéndose que completar con la reforma puramente microeconómica, esto es, con ese "lado difuso del desarrollo" que se puede vislumbrar a través del aumento de la formación bruta de capital fijo en las empresas privadas y en la productividad del trabajo, que permite diferenciar tres tipos de empresas en México: las que pertenecen al sector pujante y competitivo, "que representan aproximadamente una quinta parte del total del sector manufacturero"; las empresas condenadas, porque "para ellas los efectos de la desregulación y la corrección macroeconómica representan un reto difícil de superar", que son otra quinta parte; finalmente, los tres quintos restantes pertenecen a las que inician ahora su reconversión y modernización.

La tercera reforma es la puesta en marcha del llamado **liberalismo social** enfrentado tanto con el paternalismo como con el populismo, "que cobra sus intervenciones con deuda, inflación, y mayor miseria". Pretende esta filosofía que, a través del gasto social y del Programa Nacional de Solidaridad, se procuren mejorar, prioritariamente, las condiciones sociales de los mexicanos.

Con la confluencia de estos cambios, ha surgido un nuevo espíritu en México. Como señaló bellamente Silva Herzog, "existe una actitud nueva, diferente. No es necesariamente mejor, sino sólo distinta. Hace unas semanas recibí en mi oficina de Madrid a un artesano-zapatero de un pequeño pueblo del Estado de México. Venía a

ver las instalaciones y los medios de producción de Valencia y Alicante y a platicar con posibles socios. A pesar de sus años, nunca había salido del país. Me reiteró su convicción de que era necesario salir, ver otras cosas, aprender. Sólo así podría competir y sobrevivir".

Estos tres casos ejemplares —y podríamos ampliarlos a los casi heroicos de Bolivia, al esfuerzo de reforma de Nicaragua, al reto colombiano o al cambio de dirección de Ecuador, y así sucesivamente— nos prueban la magnitud del cambio. Se apuesta, con denuedo, a un desarrollo logrado gracias a la inserción en la economía internacional. También a que la competitividad debe lograrse con la aceptación de las reglas del mercado libre. Asimismo, a que el Estado tiene la tarea primordial de achicarse y de aceptar como un lema el del "santo temor al déficit", mientras aumenta su eficacia, para dejar un amplio espacio a la iniciativa privada. La reforma de la Seguridad Social, hacia sistemas cada vez más relacionados con técnicas de capitalización del seguro privado, debe unirse a una política de rentas que, mediante acuerdos de solidaridad nacional, haga disminuir las presiones salariales que contemplaron, e incluso azuzaron, los populistas de antaño. Y es preciso hacer todo esto de acuerdo con las reglas democráticas, poniendo en el centro de los afanes el culto a la Constitución, sin el que, sencillamente, no se explican estos pueblos.

Pero las cosas no están aun nada claras. Los muy recientes sucesos de Chiapas en México y de Santiago del Estero en la Argentina tienen, probablemente una enjundia superior a la de un simple alzamiento momentáneo. Todos los espartaquismos de este tipo están condenados a esfumarse, si sólo son eso; pero constituyen el preludio de alteraciones más profundas si reciben aliento de la opinión pública.

Por eso, en ese momento en que cruje un modelo económico en el que muchos teníamos puestas las esperanzas, conviene volver a los datos económicos subyacentes.

En la actual situación iberoamericana, existe un muy alto riesgo de crisis económica, por una parte a causa de motivos endógenos, pero también debido a potentes causas exógenas. Lo esencial de los primeros se liga al cansancio porque el camino hacia la tierra que mana leche y miel está resultando más arduo de lo que se supuso por la mayor parte de los ciudadanos. El que la alternativa sea la esclavitud en Egipto pasa, casi siempre a olvidarse. Lo fundamental de las causas externas radica en la persistencia de la crisis económica mundial. Tendría que denominarse a esta etapa, la de la mala suerte iberoamericana. A partir de 1982, cuando la economía mundial comienza a desperezarse, se inicia la violenta crisis de la deuda externa que, al provocar el abaratamiento de los productos iberoamericanos, afianza la prosperidad de los países industriales, aunque para salir de esta crisis de pagos internacionales, ¿cabía otra solución que la de vender al exterior lo más posible, aunque fuese envileciendo las cotizaciones? La prosperidad occidental avanza poderosamente hasta 1990

y cuando, por fin, hacia esa fecha, Iberoamérica decide poner en marcha la política económica que había estúpidamente rehuido por la presión de los populismos, una crisis mundial importante hace que se dilate en el tiempo la expansión que siempre acaba de ser el fruto de una política económica seria.

El 17 de diciembre de 1993 se repartió el trabajo, siempre utilísimo, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), titulado **Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe 1993**. Por supuesto que el Producto Interior Bruto (PIB) aumentó en el área un 3,2%, pero esto supuso que por habitante sólo mejoraba un 1,3% e incluso que empeoraba en algunas naciones. Dejemos a un lado las situaciones aberrantes de Haití, donde el PIB por habitante desciende un 12,6% respecto a 1992, y de Cuba, donde según una estimación muy probable de Javier Fernández Olano, parece haber disminuido el PIB global cubano un 50% desde 1990. En el resto aparecen cinco repúblicas que empeoran en su PIB por habitante. De peor a mejor comportamiento son Nicaragua, Venezuela, México, Ecuador y República Dominicana.

Aparte de eso, en el citado **Balance preliminar** se ha de consignar que en "la mitad de los países de la región sobre los que se dispone de información, han experimentado una desaceleración de su ritmo de crecimiento. Argentina, Chile, Costa Rica y Panamá han moderado las elevadas tasas de expansión registradas en el año anterior".

Esa situación preocupante se debe, en primer lugar, señala la CEPAL, al "efecto acumulativo de las políticas de ajuste y las reformas adoptadas en los años anteriores, que lentamente han ido modificando las bases sobre las que funcionan las economías". Claro que en dos países iberoamericanos, Nicaragua y Venezuela, simultáneamente se han acentuado la recesión y la inflación. En la mayoría de los países en que se observa una atenuación de la inflación, "se registra asimismo una desaceleración del crecimiento, aunque en algunos casos a tasas aún satisfactorias".

Finalmente, ha flexionado a la baja la transferencia neta de recursos medida en miles de millones de dólares, restando de los ingresos netos de capitales los pagos netos originados por las inversiones anteriores. Es importante que, a pesar de todo, sea positivo este saldo, porque ha permitido más que compensar el déficit de la balanza iberoamericana por cuenta corriente, con lo que, según el citado **Balance preliminar**, "las reservas internacionales de la mayoría de los países de la región volvieron a crecer por quinto año consecutivo, aunque en una magnitud menor que durante el bienio anterior". La deuda externa desembolsada alcanza, por eso otro máximo histórico, con 487 miles de millones de dólares. La confianza internacional, como muestran los precios de oferta de los pagarés de la deuda externa en el mercado secundario, compilados por Salomón Brothers y Merrill Lynch, mejora para todos los países.

Este cansancio en la lucha contra la inflación se une a otro, derivado del esfuerzo exportador, que ha de soportar caídas notables en los precios de algunos productos mineros, energéticos y alimenticios muy importantes, mientras en cambio crecen con más fuerza los de los artículos de importación. La relación de precios de importación respecto a los de exportación empeoró un 4,9% en 1993, y un 18,1% acumulado de 1991 a 1993. Desde 1984, esta relación real de intercambio, mantiene una caída persistente. Quiere esto decir que Iberoamérica, simplemente para cubrir del mismo modo su necesidad de bienes del exterior, ha de ofrecer cada vez más bienes propios, o sea, más esfuerzo exportador. Por supuesto que en esta caída tienen un puesto todos los países petroleros más Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá.

Todo esto se une al incremento del paro urbano en Argentina, Ecuador, Honduras y México. El salario mínimo real urbano cae en México, en Ecuador y en Uruguay. Pero, sobre todo, el pueblo de la región, que alcanza ya los 450 millones de habitantes, observa que para mejorar su PIB por habitante un 1,3%, gracias a la inclusión de Brasil, ha de experimentar una inflación media, a causa también de Brasil, del 800%. Pero, si tenemos en cuenta que ésta es una medida muy poco significativa, un índice elemental de miseria o malestar (IM), calculado restando del incremento del PIB por habitante el incremento del IPC (Índice de Precios al Consumo), nos muestra, eliminando a un Brasil que sólo sirve para perturbar, que se estaba en el buen camino. Efectivamente, al comparar los índices miseria de 1992 con los de 1993 observamos que sólo empeoran en Chile, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela.

Pero a este buen camino emprendido se le exigen frutos inmediatos, porque vastas capas de población se sienten cansadas. El escritor mexicano Carlos Fuentes se hace portavoz de la postura de su compatriota, el politólogo Jorge Castañeda (1994), que acaba casi de escribir esta frase: "Los éxitos macroeconómicos... no se han transformado en condiciones mejores de vida para la mayoría". Gabriel Zaid, también mexicano, dirá que tales éxitos se consiguen "a costa de la sociedad: con mayores impuestos, ventas de patrimonio social, salarios castigados para los trabajadores, réditos castigados para los ahorradores". Con ambos se solidariza Carlos Fuentes. También acaba de publicar Tito Drago (1993) su ensayo, **Chile. Un doble secuestro**. En él sostiene que "el fracaso del neoliberalismo económico queda demostrado por su propia experiencia, sin atenuantes", pero que "no se puede decir lo mismo del modelo de cambios económicos y sociales, impulsado por Salvador Allende", que se basaba, lo dice Tito Drago un poco después, en este falsísimo postulado que el presidente Allende expuso en su primer mensaje al Congreso Pleno del Parlamento de Chile, en mayo de 1971: "Es éste un tiempo inverosímil, que provee los medios materiales de realizar las utopías más generosas del pasado. Sólo nos impide lograrlo el peso de una herencia de codicias, de miedos y de tradiciones institucionales obsoletas".

Frente a planteamientos tan irreales es preciso volver a confrontarlos con los datos exactos. Acaba de repartirse, preparado por CEPAL, el "Balance preliminar de la

Economía de América Latina y el Caribe 1994" (Naciones Unidas, 20 diciembre 1994). Las cosas no iban mal. La región crecía en su PIB, en 1994, un 3,7%. Este incremento es el más alto de los últimos catorce años. La renta por habitante lo hacía al 1,9%. La tasa media de inflación, excluyendo a Brasil, cuyas cifras elevadísimas en el aumento de los precios —un 1.294,0% en 1994— harían perder toda representatividad a las medias iberoamericanas, también muestra una mejor situación: un 49% en 1991; un 22% en 1992; un 19% en 1993 y, finalmente, un 16% en 1994. Tendrán inflación de un solo dígito Argentina con un 3,6%; Bolivia, con un 9%; Chile, también con el 9%; El Salvador, con el 9,4%; México con un 7% y Panamá, con el 1,8%. Además hacia estos países se desplazaron sumas muy altas de inversiones extranjeras. Por eso, aunque el déficit por cuenta corriente fue muy alto —del orden de los 50 mil millones de dólares—, más que se compensó con los casi 57 mil millones de dólares de entrada de capital extranjero.

Toda esta relación positiva no dejaba de ofrecer flancos a la preocupación. En primer lugar, el PIB por habitante fue sólo en 1994 el 97,6% del alcanzado en 1980. La "década perdida" ya son los "quince años perdidos". Pero este "Balance preliminar" añade que "resulta evidente que en América Latina y el Caribe tasas de crecimiento inferiores a 4% no bastan para permitir grandes avances en la lucha contra la pobreza ni para impedir que el desempleo y el subempleo sigan a niveles inaceptables". Agréguese que las llegadas de capitales foráneos, "pueden socavar los esfuerzos por expandir las exportaciones".

Como consecuencia, la deuda externa crece de modo considerable: en 1990, 441.500 millones de dólares; 456.000 millones en 1991; 474.100 millones en 1992; 504.500 millones en 1993 y en 1994, 533.800 millones. No es algo que deba preocuparnos poco, y más en unos mercados financieros mundiales en los que los tipos de interés ya no son bajos. Sterie T. Beza, director del Hemisferio Occidental del F.M.I., declaraba en el "Boletín" de esta institución del 16 de enero de 1995, que algunos países iberoamericanos, en la mayor parte de los casos para financiar el sector privado, "nuevamente se están endeudando y en considerable medida", en lo que existe un riesgo: "El problema de la deuda se debió, en general, a que ni los prestatarios ni los prestamistas midieron suficientemente las consecuencias del endeudamiento del sector público, pero en ciertos casos los problemas se originaron en deudas, inicialmente privadas pero recayeron sobre el sector público, al producirse dificultades de política económica. En consecuencia, hay que estar alerta para evitar la gestación de un nuevo problema de la deuda". Por eso Beza añade: "A través de la política fiscal debe evitarse un aumento considerable de la deuda interna o externa".

Pero, aún así, por las buenas perspectivas que en general se habían creado, el mundo entero apostaba en favor del futuro de la región. Bajo el gigantesto título de **Latín America**, en la portada de *Business Week* del 5 de diciembre de 1994, se leía,

acompañando a un diseño del mapa de la región iberoamericana: "Las naciones latinas de América han creado un nuevo y poderoso bloque comercial para todo tipo de productos, desde material electrónico ligero, a camiones. Si no se unen al NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio del Norte de América, que engloba a Estados Unidos, Canadá y México), vincularán su vasto mercado común a Asia y Europa".

El papel de Mercosur, sobre el que habrá que hablar más de una vez en adelante, llevó a declarar a Eduardo Aninat, ministro chileno de Hacienda, mientras se mostraba muy reticente sobre las consecuencias de la Cumbre de las Américas convocada por el presidente Clinton en Miami del 9 al 11 de diciembre de 1994: "No jugaremos todas nuestras cartas a la Cumbre de Miami. Trabajaremos con Mercosur, con o sin el NAFTA".

Finalmente, nadie dudaba que se había superado en la región la **década perdida** —la que va de 1982 a 1992— provocada por la citada crisis de la Deuda externa. Se habló de tasas medias regionales de crecimiento para 1995 del 3% o incluso más. Las Bolsas emergentes de la región, con sus subidas espectaculares en las cotizaciones, atraían capitales extranjeros con gran facilidad.

De pronto, como sucedió en agosto de 1982, cuando todos hablaban del cielo sereno de la economía iberoamericana, se oyó un estrepitoso trueno en México. Los acontecimientos de Chiapas no eran el único motivo nacional de alarma.

Jesús Reyes Heróles, un importante economista mexicano, había señalado hace unos cuantos meses, que crear una situación estabilizada no es cosa muy difícil en una economía nacional. Lo complicado era pasar de una estabilización sin más a una etapa de crecimiento equilibrado, esto es, manteniendo la estabilización.

El caso de México es muy claro en este sentido. En 1994 lo más probable debe haber sido que el Producto Interior Bruto (PIB) creciese un 2,5%, si es que se conseguía que la producción industrial aumentase un 4,8%, lo que no es muy seguro. Este avance, podría calificarse de aceptable, sin más, sobre todo teniendo en cuenta que 1993 había sido un año en el que esa producción industrial había descendido un 0,2%. Por su parte la inflación observada, medida por el índice de precios de consumo, en los últimos doce meses, hasta septiembre de 1994 ascendía al 6,7%. Por supuesto que no se había logrado el 5% de aumento de estos precios previsto por el Gobierno, pero contrastaba con el incremento, diciembre sobre diciembre, de 1992, que había sido del 11,9%, y con el de 1993, del 8%.

Había, pues, que volver a insistir en que el desarrollo de la economía mexicana era más lento que lo esperado, pero positivo. Sin embargo, la quiebra económica del

país surgió en sus balanzas exteriores. Como se puede leer en **Situación Latinoamericana** correspondiente al 4º trimestre de 1994, "durante el primer semestre del año la cuenta corriente registró un déficit de 14.200 millones de dólares, montó un 23,9% superior al observado durante el mismo semestre del año pasado. De observarse la misma estacionalidad que en años anteriores, el déficit de la cuenta corriente podría superar (los) 28.000 millones de dólares, lo que sería equivalente al 7,8% del PIB".

Según la misma fuente, todo esto "ratifica las dudas en torno a la capacidad del país para financiar déficit recurrentes de esa magnitud y la elevada vulnerabilidad de la economía ante los flujos procedentes del exterior, así como a las condiciones prevalecientes en el mercado de fondos prestables; en este sentido, el aumento de las tasas internacionales de interés no ha ayudado, ya que, por una parte, proporciona un aumento de pagos al exterior y, por otra, desvía (o retiene) recursos que podrían canalizarse a México. En la medida que los resultados de las cuentas con el exterior fueron peores a los que se habían anticipado, cada vez son más estrechos los márgenes para la próxima Administración, la de Zedillo, en esa materia".

Es aún más preocupante esto si tenemos en cuenta, de acuerdo con la Contabilidad Nacional estimada por INEGI, que la financiación de la inversión del país, medida por la formación bruta de capital, se nutría en un 71,4% de ahorro interno y en un 28,6%, del externo. Como es inimaginable, con el pequeño nivel del ingreso mexicano por habitante, que se alcance un fuerte ahorro interno, el desarrollo económico del país procederá de la llegada de ese 30% de ahorro exterior, sin el cual se hundiría la economía mexicana.

Para mantener esta afluencia, ha sido necesario ofrecer, de modo continuo, atractivos para los ahorradores extranjeros. Fueron de tres tipos: una aparente seguridad de que el peso mexicano no se devaluaría frente al dólar; un mercado bursátil emergente, que generase altos beneficios, aparte de altos tipos de interés para operaciones financieras corrientes; finalmente, una mano firme capaz de orientar la economía de esta nación del modo que apetecen los inversores, circunstancias todas que coincidían, como se ha dicho, en la figura de Pedro Aspe como Secretario de Hacienda.

Sucesivamente se provocaron una serie de golpes fortísimos, que se transformaron en una gran explosión al final de 1994. Por una parte, los inversores extranjeros conocieron que, como en 1982, México se encontraba con una crisis considerable de la balanza de pagos, la reserva de divisas había caído desde 29 mil millones de dólares el pasado febrero a menos de 7 mil millones en diciembre. El servicio de la deuda va a engullirse, a lo largo del próximo semestre 17 mil millones de dólares. La sombra de 1982 ha vuelto a llenar de preocupación a los prestamistas: ¿no habrá llegado el momento de abandonar México?

Esto supuso una caída en la cotización del peso, que en pocos días se devaluó en un 40%, mientras que se retiraban de un país muy corto ya en reservas exteriores, mil millones de dólares, lo que significaba el 12% de la inversión exterior. La bolsa, en términos de dólares, respecto al 31 de diciembre de 1993, se convertía en la campeona de pérdidas en los mercados deudores del mundo, salvo el caso, realmente aterrador de Turquía: caía en un 48,7%, mientras, claro es, crecían los tipos de interés. Además, como señaló *The Economist* el pasado 7 de enero, bajo el título de **El huevazo en la cara de Zedillo**, los inversores extranjeros "desconfiaron de las promesas del arrogante Jaime Serra, el nuevo Secretario de Hacienda", acostumbrados "a la accesibilidad y al diálogo franco con su antecesor Pedro Aspe". Tanto recelaron de Serra que el presidente Zedillo hubo de sustituirlo rápidamente por Guillermo Ortíz.

De modo febril los mexicanos han comenzado a implorar ayuda internacional. Según indica Joaquín Ibarz en *La Vanguardia* del 7 de enero de 1995, son "cada vez más fuertes (las presiones) de Estados Unidos para que se privatice Pemex, última gran reliquia del nacionalismo económico en México". Los huesos del general Cárdenas tienen que haberse conmovido en su tumba. Mientras tanto se pronostica, para 1995, una inflación del 30% y un incremento del PIB del 1%.

En 1982 la crisis que registró México no se retringió a esta nación en Iberoamérica. En estos momentos, todos contemplan a Argentina. Bien merece la pena, por eso, el seguir bien de cerca lo que, en adelante, puede suceder en ellos.

Esto es, cuando ya se veían los confines de la tierra prometida, muchos hispano-americanos pueden volver hacia Egipto, hacia un atroz pasado. La irresponsabilidad de los Carlos Fuentes, de los Zaid, de los Jorge Castañeda, de los predicadores de la Teología de la Liberación, de las mil y una organizaciones de ecologistas, vetero y neomarxistas, de indigenistas, sencillamente escalofría.

Frente a estas actitudes, donde se mezclan la ineficacia, sobre todo de la política económica mexicana, la demagogia y la frivolidad, es preciso volver a una frase del economista español Cabarrús, escrita en su **Discurso sobre la libertad de comercio concedido por S.M. a la América meridional** presentado a la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País el 28 de febrero de 1778: "Haga lo que quiera el error para defender su imperio... podrá acaso sacrificar, en la sombra de la noche, a algún sabio a su furor, pero el fruto de nuestras meditaciones fermentará en el silencio, y sus efectos serán la época feliz que disipe las preocupaciones nocivas". Esperemos que las "meditaciones silenciosas" de los mejores economistas iberoamericanos permitan que, definitivamente, esos países comiencen a atisbar "la época feliz" que les fue arrebatada por el error hace sesenta, setenta, ochenta años, y en la que pueden reincidir malos políticos y peores consejeros en la actualidad.

BIBLIOGRAFIA

- Aspe, Pedro, *Crisis and adjustment in Mexico* (MIT, 1987)
- Cáceres, Carlos F., *Transición económica: la experiencia chilena*, en *Revista del Instituto de Estudios Económicos*, nº 4, 1992.
- Cambó, *Meditacions-Dietari (1941-1946)* (Alpha, 1982).
- Campanella, Hebe Noemí, *La generación del 80. Su influencia en la vida cultural argentina* (Tekne, 1983).
- Castañeda, Jorge, *La utopía desarmada. La izquierda latinoamericana después de la guerra fría* (Alfred Knopf 1994).
- Cavallo, Domingo F., *La Argentina que pudo ser* (Manantial, 1989).
- Cavallo Domingo F., *Volver a crecer* (Sudamericana-Planeta, 1984).
- CEPAL, *Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe. 1992* (Naciones Unidas, 1992).
- CEPAL, *Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe. 1993* (Naciones Unidas, 1993).
- Díez de la Guardia Bueno, Carlos, *La economía boliviana 1982-1985: la hiperinflación y la política económica* (Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, septiembre, 1991).
- Drago, Tito, *Chile. Un doble secuestro* (Editorial Complutense, 1993).
- Dromi, José Roberto, *Reforma del Estado y privatización. Introducción, notas y texto ordenado* (tres tomos, Astrea, 1991).
- Dromi, José Roberto y Menem, Carlos, *Reforma del Estado y Transformación Nacional* (Editorial Ciencias de la Administración, 1990).
- Fernández Olano, Javier, *Cuba, una crisis dentro de la crisis*, en *Expansión*, 3 de enero de 1994.
- Foxley, Alejandro, *El Chile y su futuro. Un país posible* (Cieplan, 1987).
- Fuentes, Carlos, *Una nueva izquierda latinoamericana*, en *El País*, 27 de diciembre de 1993.

Hachette, D. y Lüders, R., *El proceso de privatización de empresas en Chile, 1974– 1982*, en *Boletín Económico* nº 22 de 1987 del Instituto de Economía de la Universidad Católica.

Iglesias, Enrique V., *La transición económica latinoamericana. Perspectivas para los noventa* en *Revista del Instituto de Estudios Económicos*, nº 4 de 1992, monográfico titulado *El resurgimiento de la economía iberoamericana*.

Larraín A., Luis, *Sector previsión* en el libro dirigido por Cristián Larroulet V., *Soluciones privadas a problemas públicos* (Instituto Libertad y Desarrollo, 1991).

Meller, Patricio, *Una perspectiva de largo plazo del desarrollo económico chileno, 1880-1990*, en el volumen, coordinado por Meller y Magnus Blomström, *Trayectorias divergentes. Comparación de un siglo de desarrollo económico latinoamericano y escandinavo* (CIEPLAN-Hachette, 1990).

Ramos, Jorge Abelardo, *La era del peronismo. 1943-1976* (Ediciones del Mar Dulce, 1981).

Rosenthal, Gert, *la CEPAL ayer y hoy*, en *El Mercurio* de 26 de marzo de 1993.

Sepúlveda M., Eduardo, *Crisis del carbón: ¿Muerte natural o eutanasia?* en *El Mercurio*, 21 de marzo de 1993.

Williams, John H., *El comercio internacional argentino en un régimen de papel moneda convertible (1880-1900)* (la edición en inglés es de 1917; en español es la de la Universidad Nacional de Córdoba, 1965).